Más allá de las urnas

Algunos elementos de análisis frente a las elecciones regionales de 2019

FRANCISCO JAVIER TOLOZA
POLITÓLOGO
DOCENTE DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Más allá de lecturas centradas meramente en guarismos electorales, o de las miradas propias del llamado *marketing* político, las elecciones regionales del pasado 27 de octubre no dejan de expresar una síntesis -en el sentido gramsciano- de "movimientos orgánicos" que condensan características importantes de esta nueva etapa de la lucha de clases posterior al Acuerdo Final de Paz y bajo el actual gobierno del Centro Democrático.

Sin perder de vista particularidades propias de este tipo de comicios locales y de sus limitaciones como mecanismo confeccionado para la disputa política intrasistémica, son varios los rasgos relevantes a analizar para la comprensión de las contradicciones existentes en el -y del- régimen político colombiano.

Anacronismo del régimen electoral

En primer lugar, el sistema electoral de la mal llamada "democracia más antigua del continente" mostró por enésima vez su anacronismo y podredumbre. Las de 2019 fueron elecciones realizadas bajo el mismo régimen electoral previo al proceso de paz, y que había sido reconocido como una de las causalidades y aci-

La grave crisis humanitaria en cuyo marco tuvieron lugar los comicios electorales devela la persistencia de uno de los rasgos característicos del régimen político colombiano: su compulsión a recurrir a la violencia política en medio de un manto formal de legalismo, que incluye sin duda el ritual electoral. Sobra decir que la continuidad del conflicto ha incidido inevitablemente en el desarrollo y resultados no solo de las elecciones sino de las diversas luchas sociales y políticas.

cates de la guerra. Aunque parezca increíble, cerrando la segunda década del siglo XXI, el Código Electoral vigente sigue siendo el vetusto Decreto 2241 de 1986, previo incluso a la Constitución de 1991 y hoy a todas luces inapropiado para regular estas votaciones o intentar corregir sus vicios.

Burlada la reforma política electoral mandatada en el Acuerdo de La Habana, y salvando un par de novedades muy puntuales (vigencia del Estatuto de la Oposición[1], existencia de nuevos partidos con personería jurídica) se mantienen las reglas del juego electoral hechas justamente por quienes han ganado y, esencialmente, siguen ganando con ellas. Consecuentemente con la perennidad de este sistema electoral viciado, se conservan igualmente -aunque con leves remozamientos- todas las perturbaciones y anomalías antidemocráticas denunciadas desde antaño, acompañadas ahora por nuevas formas de alteración del proceso electoral.

Gamonalismos recargados, candidatos prepagos de desproporcionadas financiaciones legales e ilegales, compra de votos, venta de avales, trashumancia de votantes, encuestadoras fletadas y falaces sin regulación alguna, perversión y manoseo ilimitado de las figuras de los grupos significativos de ciudadanos y de las coaliciones, transfuguismos legalizados, atraso técnico y caos administrativo de las instituciones electorales, trampas con las inhabilidades y sanciones aprovechando la inexistencia de una real y oportuna jurisdicción electoral, entre otras tantas irregularidades, fueron protagonistas de los pasados comicios. Y, lamentablemente, seguirán teniendo roles estelares en próxi-

1 Gracias al Estatuto de Oposición expedido dentro de la implementación del Acuerdo de Paz, se habilita el otorgamiento de curules en concejos y asambleas para los segundos candidatos más votados a alcaldías y gobernaciones. Se inicia un experimento interesante de ejercicio de oposición local que, no obstante, tiene grandes vacíos en su reglamentación y que va a ser utilizado por todas las fuerzas políticas.

mas votaciones, mientras se sigan negando las necesarias transformaciones al régimen electoral. En resumen, el triste espectáculo que periódicamente nos muestra el ritual electoral colombiano manifiesta su crisis y descomposición pese a la funcionalidad que conserva esencialmente para el bloque de poder y quienes usufructúan el modelo representativo. Pero, al mismo tiempo, expresa la pertinencia de la aplazada y obstaculizada reforma política como bandera irrenunciable para la apertura democrática.

Elecciones en medio del conflicto y la violencia

En segundo lugar, más allá de las reglas de juego específicas para la contienda electoral, estas primeras elecciones locales del postacuerdo se dieron en medio del conflicto y la violencia política. En consecuencia, no podemos hablar de la existencia de reales garantías democráticas a nivel nacional, y esto mancilla los resultados en buena parte del país. La reivindicación del Acuerdo de Paz y su invaluable aporte para la convivencia pacífica y la reconciliación no pueden llevarnos a caer en la negación del conflicto propio de ciertas facciones del establecimiento.

El Acuerdo de La Habana concibió el desmantelamiento de las organizaciones paramilitares y sus redes de apoyo como elemento esencial del fin del conflicto. En contravía a lo firmado, en múltiples territorios han persistido, emergido y/o se han potenciado nuevas y viejas formas de paramilitarismo. Este neoparamilitarismo -aunque distinto al de las AUC- es una realidad armada con claros intereses económicos, sociales y políticos, que sigue cumpliendo su función contrainsurgente y de acumulación por despojo en medio de la ineptitud cómplice del Ministerio de Defensa. Esta situación, aunada a la negativa gubernamental a avanzar hacia una paz completa, mantiene *de facto* a millones de compatriotas bajo el padecimiento de la

Gamonalismos recargados, candidatos prepagos de desproporcionadas financiaciones legales e ilegales, compra de votos, venta de avales, trashumancia de votantes, encuestadoras fletadas y falaces sin regulación alguna, perversión y manoseo ilimitado de las figuras de los grupos significativos de ciudadanos y de las coaliciones, transfuguismos legalizados, atraso técnico y caos administrativo de las instituciones electorales, trampas con las inhabilidades y sanciones aprovechando la inexistencia de una real y oportuna jurisdicción electoral, entre otras tantas irregularidades, fueron protagonistas de los pasados comicios.

guerra, especialmente a comunidades rurales campesinas, afrodescendientes e indígenas.
Ningún análisis electoral debe ignorar que los pasados comicios locales se dieron en medio de un genocidio en curso contra las organizaciones sociales que ya suma más de 200 líderes muertos, así como del asesinato de 169 excombatientes firmantes del Acuerdo de Paz en proceso de reincorporación. La Misión de Observación Electoral (MOE)[2] registra desde el inicio de la campaña electoral 532 dirigentes sociales, políticos y comunales víctimas de violencia política en más de 200 municipios; de igual manera contabiliza 135 candidatos víctimas de hechos de violencia a partir del cierre de las inscripciones en julio pasado, sin contar las 36 amenazas colectivas contra listas o partidos enteros, ni las candidaturas compelidas a retirarse, ni la represión masiva de las protestas urbanas durante este mismo periodo.
Esta grave crisis humanitaria devela la persistencia de uno de los rasgos característicos del régimen político colombiano: su compulsión a recurrir a la violencia política en medio de un manto formal de legalismo, que incluye sin duda el ritual electoral. Sobra decir que la continuidad del conflicto ha incidido inevitablemente en el desarrollo y resultados no solo de las elecciones sino de las diversas luchas sociales y políticas.

Contradicciones en el bloque de poder

Un tercer gran elemento de las pasadas elecciones a tener en cuenta corresponde al momento actual de la disputa en el seno del bloque de poder. Los resultados en las urnas expresan una derrota del uribismo en la consolidación de su proyecto hegemónico, sin que ello implique *per se* que estemos presenciando sus estertores. El Centro Democrático como partido creció con respecto a las elecciones de 2015 -cuando estaba en la oposi-

2 Misión de Observación Electoral. *Kit Electoral. Elecciones Autoridades Locales*. 2019. 115 p.

ción-, tanto en votos como en elegidos[3], manteniendo una presencia nacional y recogiendo sectores considerables de elites regionales y de pequeños municipios, pero quedó lejos de ser el partido mayoritario a nivel nacional y, sobre todo, sufrió grandes descalabros en plazas claves para un partido de gobierno, siendo incapaz de ratificar la mayoría electoral obtenida en las presidenciales en varias regiones. En términos de la llamada opinión pública, la desastrosa gestión de Duque, el desgastante proceso en la Corte Suprema por manipulación de testigos contra el otrora intocable expresidente y su virulenta oposición al Acuerdo de Paz le pasan cuenta al CD ante electorados urbanos y nuevas generaciones de votantes que no se sienten representadas con su proyecto de ultraderecha.

En términos de movimientos orgánicos, se mantiene la fractura dentro del bloque de poder gestada por el proceso de paz con las FARC-EP. Desaparecida esta guerrilla, múltiples sectores del establecimiento ven en el uribismo un pesado e inútil fardo para cargar, y el discurso neofascista no logra la cohesión del bloque hegemónico. El manejo sectario y pendenciero de Uribe y de su partido tanto de la burocracia del ejecutivo como de la misma agenda política -centrada ante todo en el blindaje jurídico del expresidente-, así como del proceso de verdad abierto por el Acuerdo de Paz, han imposibilitado por ahora una reconciliación en el seno del bloque de poder y de la clase política, mientras que, por el contrario, las diferencias tienden a ahondarse.

Es así como, en medio de la crisis sostenida de los partidos tradicionales y "neotradicionales" y ante la convulsión social y política que recorre Nuestra América en la decadencia del neoliberalismo, importantes sectores del bloque de poder preparan desde ya alternativas del régimen al desgaste uribista y a la incapacidad de consenso que mostró el santismo en las pasadas elecciones presidenciales. Mientras tanto, a la larga agonía de los 3 años que restan del gobierno de Duque le corresponderá un nuevo e inusitado escenario generado por estas elecciones, en el que no contará con un solo alcalde de su coalición de gobierno en ninguna de las 10 principales capitales del país.

Balance ambivalente de las fuerzas políticas tradicionales

Un cuarto aspecto que se deriva de estas elecciones se refiere al balance ambivalente de los denominados partidos tradicionales, a los que se agregarían los "neotradicionales" (devenidos de estos, como La U o Cambio Radical). Si bien el 27 de octubre se expresaron importantes votaciones fuera de la férula de las grandes maquinarias políticas, y se puede notar estancamientos y retrocesos de estos partidos y de la llamada "clase política", tales avances de apertura democrática deben matizarse ante otras realidades igualmente palmarias.

En efecto, mientras candidaturas antiuribistas, cívicas e incluso alternativas ganaron importantes capitales con mayor o menor guiño de maquinarias y canalizando un inconformismo real, clanes y caciques electorales disfrazados de "coaliciones" o grupos significativos de ciudadanos arrasaban, entremezclados con los partidos del establecimiento, con la mayoría de gobernaciones del país[4]. Se ratifica la vigencia en las urnas dentro de este perverso sistema electoral de potenciadas maquinarias, como la de los Char,

3 El CD pasó de 56 a 191 alcaldías y, técnicamente, de 2 a 6 gobernaciones, de las cuales 4 fueron en coalición, ganando directamente solo Casanare y Vaupés. En listas al Concejo se aumentó la votación de 1,1 a 1,5 millones y en Asamblea se mantuvo en 1,1 millones, pero para ambas corporaciones solo fue el partido más votado en Antioquia, mientras que a nivel nacional ocupó el quinto lugar.

4 Las excepciones más relevantes de esta tendencia serán las gobernaciones de Magdalena y Huila, que no obstante, son ganadas por políticos de reconocido ejercicio electoral en sus respectivos departamentos.

Cada coalición, cada administración, cada territorio es un escenario abierto para la lucha política. Estamos en un intenso terreno en disputa, donde urge consolidar una alternativa política al régimen sin que ello implique su aislamiento político. En medio de los conflictos geopolíticos globales y continentales, la crisis económica y política regional y el ascenso de la movilización popular en Nuestra América, la política en Colombia quedará marcada por disputas más allá de las urnas.

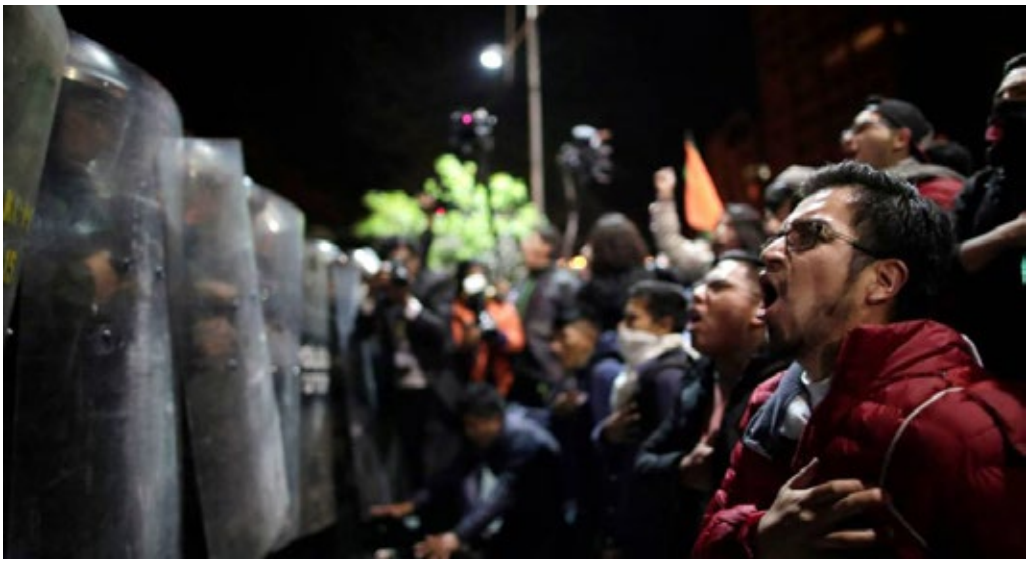
Dilian Francisca Toro o los Aguilar, pero también que un importante espectro del electorado a nivel regional, en pequeños y medianos municipios sigue atado al clientelismo más tradicional y a las expresiones más reaccionarias del bloque de poder. Que nadie olvide que esta franja de votación fue determinante en la victoria del NO en el plebiscito.

En lo cuantitativo se podrá decir que el Partido Liberal sigue siendo el más votado, o hablar del estancamiento del conservatismo o de la merma de votación de Cambio Radical o de la de La U., pero de fondo todos estos partidos no son colectividades disciplinadas ni ideologizadas, sino que tienden a decantarse en meras franquicias electorales, descuadernadas en función de intereses particulares tras cada aval otorgado y unos débiles liderazgos nacionales. Incluso una medición rigurosa de su desempeño electoral se torna difícil en medio de la mimetización de muchos de sus candidatos en coaliciones en las que todos los partidos tradicionales y otros movimientos colgaron sus logos y avales, la inclusión de otras fuerzas en sus listas (como es el caso de la Misión Carismática en Bogotá en el liberalismo), o ante la profunda autonomización o personalismo de estas agrupaciones a nivel regional, como pasa en la Costa Caribe.

Posicionamiento de diversas "alternativas" políticas

Una quinta línea de análisis corresponde al posicionamiento de múltiples "alternativas" teniendo en cuenta el debilitamiento de las opciones hegemónicas ya mencionadas. Además de la abstención y la importante votación protesta (votos en blanco y no marcados)[5], se proyectaron alternativas de derecha,

5 Se mantiene la abstención en el 40% y en algunas grandes ciudades, como Cali o Medellín, sigue votando menos de la mitad del electorado. En Barranquilla y Armenia, el voto en blanco fue la segunda opción más votada.



de centro y de izquierda en el terreno electoral. Desde el bloque de poder se procura canalizar las "alternativas" de derecha y de centro como opciones dentro de la llamada "gobernanza democrática", al tiempo que la matriz mediática predominante pretende venderlas como la derrota de los "extremos". Se trata de variantes al autoritarismo uribista, que recurren a discursos renovados, técnicas modernizadas y frescas de comunicación política, en ruptura verbal con la política tradicional, pero que programáticamente se enmarcan -con ribetes- dentro del neoliberalismo, haciendo hincapié en algunos aspectos importantes más no esenciales de la gestión pública, aunque, en realidad, no hay un horizonte estratégico más allá del capitalismo y del sistema de representación liberal. De Barranquilla a Bogotá -y en buena parte de los resultados electorales de las grandes ciudades- pueden estarse perfilando estas opciones de recambio del régimen dentro del régimen, a las que un importante sector del establecimiento apoya y lanza cantos de sirena para gerenciarlas, buscando vacunar tempranamente estos procesos contra el virus del inconformismo ciudadano que han logrado representar, buscando reconfigurar un cierre del sistema político frente a alternativas al régimen -o a las que sean sospechosas de serlo-, en relación con las cuales se promueve un *apartheid* político.

Las elecciones de octubre esencialmente definieron unos nuevos términos para la continuidad de la lucha política de las diversas expresiones del bloque de poder, y de otras externas a este. Hay apuestas y proyecciones, pero aún son apresuradas las descalificaciones, los triunfalismos o los catastrofismos frente a las administraciones locales que empezarán en 2020, así como impreciso cualquier vaticinio hacia las elecciones de 2022, como desearían hacerlo algunos analistas. Cada coalición, cada administración, cada territorio es un escenario abierto para la lucha política. Estamos en un intenso terreno en disputa, donde urge consolidar una alternativa política al régimen sin que ello implique su aislamiento político. En medio de los conflictos geopolíticos globales y continentales, la crisis económica y política regional y el ascenso de la movilización popular en Nuestra América, la política en Colombia quedará marcada por disputas más allá de las urnas.